

SENTENCIA No 07-98. TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL. San José, a las diez horas con treinta y un minutos del seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Alvaro Lopez Jimenez., en su condición de apoderado generalísimo de Casacas Rojas de la Sabana S.A., en contra de ajuste de valor efectuado por la Aduana Central.

#### RESULTANDO

1-Que el señor Alvaro Lopez, presento ante la Dirección General un escrito denominado recurso de revocatoria y apelación en subsidio, con fecha 15 de octubre de 1997, contra el ajuste de valor realizado por la Aduana Central en la declaración aduanera de importación definitiva No 503264, aceptada el 12 de junio de 1997. Considera y solicita que en su caso, debe aplicarse la circular DGA – 21 – 97 y no la DVA – 324 – 98, porque con esta última se lesionan los intereses de su representada.

2- Que por oficio DVA – 880 – 97 del 10 de noviembre de 1997, la Licda. Maribel Abarca .Sandoval., Jefe del Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera, solicita a la Gerencia de la Aduana Central, la remisión del expediente administrativo.

3- Que por oficio AC – DT – 536 – 97 del 21 de noviembre de 1997, la Aduana Central atendiendo la gestión indicada en el punto anterior, remite copias certificadas de la declaración aduanera e indica que se revaloró la mercancía según lo dispuesto en el oficio DVA – 324 – 97.

4- Que mediante resolución No DVA – 01 – 98 del 26 de enero de 1998, la Dirección General de Aduanas, declara sin lugar el recurso de revocatoria y acoge el de apelación para ante el Tribunal Aduanero. Señala la resolución que se declara admisible el recurso de acuerdo al artículo 25 de la Ley Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías, No 7005 (en adelante Ley de Valor), en concordancia con los numerales 19 y 20 del mismo cuerpo jurídico y sobre el fondo resuelve, que al no haber aportado el interesado las pruebas requeridas por la Dirección, se resuelve con la información que dispone y establece para determinar el valor aduanero de la declaración No 503264 se emplee el oficio DVA – 324 – 97 del 4 de abril de 1997.

4- Que en las presentes diligencias se han observado las prescripciones de ley para la tramitación del recurso de apelación.

Redacta el Lic. Luis Gómez Sánchez; y,

#### CONSIDERANDO

De la simple lectura de los antecedentes se observan graves vicios en el procedimiento seguido por la Dirección General de Aduanas en la instrucción del caso subexamine, que generan una nulidad absoluta.

1- En primer lugar el fundamento jurídico utilizado para declarar admisible el recurso y entrar a conocerlo esa Dirección no es el correcto. La Dirección invoca el artículo 25 de la Ley de Valor señalando "...Que según se contempla en el artículo 25...de la Ley 7005... contra las resoluciones de ajustes y rectificaciones originados en la aplicación del artículo 19 y 20 de esa legislación, en los casos que proceda según la ley nacional, cabrá recurso de revisión ante el Director General de Aduanas...". El artículo 19 de la ley citada, señala que "... la investigación y comprobación del valor declarado procederá aún posteriormente al pago de los derechos arancelarios, así como los reparos o ajustes a dicho valor cuando esta acción proceda, siempre que el proceso anterior se realice dentro del plazo de 90 días después de pagados los derechos arancelarios correspondiente...". Obsérvese con claridad que al momento de interponerse los recursos, el despacho aduanero todavía no ha concluido, hecho señalado por el mismo recurrente quien alega que la aduana le está modificando el valor declarado y por no estar de acuerdo recurre ese acto, por lo tanto, no se cumple el presupuesto establecido en el artículo antes transcrito, que señala la facultad de una investigación después de cancelados los derechos arancelarios.

2- En segundo lugar, hay que mencionar que el ajuste de valor realizado por la Aduana Central, lo hace en el ejercicio de sus competencias de acuerdo al artículo 13, 23, 24 inciso a de la Ley General de Aduanas ( en adelante L.G.A.), 13 y 18 de la Ley de Valor, sin que esto signifique prejuzgar sobre la procedencia o no del ajuste. El consignatario de la mercancía, disintiendo de la actuación llevada a cabo por la autoridad aduanera y considerando, como lo alega, que el ajuste de valor efectuado es improcedente, puede impugna ese acto al amparo del ordinal 196 de la L.G.A. y posteriormente de mantener su disconformidad, puede recurrirlo de acuerdo al artículo 198 del mismo cuerpo normativo, presentando los recursos de revocatoria y el de revisión jerárquico e incluso contra el acto que los deniega, todavía tiene la posibilidad de presentar recurso de apelación para ante este Tribunal. La administración estaba obligada a determinar el momento procesal en el cual se encontraba el expediente y debió remitir el mismo a la autoridad competente para su conocimiento y resolución.

3- Por último, es inadmisile la actuación de la Dirección General de avocarse el conocimiento de un recurso sobre el cual todavía no es competente, siendo su obligación y lo correcto haber remitido el escrito interpuesto a la Aduana Central para que está conociera del mismo, no como un recurso de revocatoria y apelación en subsidio, sino como la acción de impugnación por parte del representante legal del consignatario contra el acto dictado por la aduana mediante el cual ajustó el valor declarado, esto último atendiendo al principio de informalismo jurídico, donde la administración tiene la obligación de interpretar lo que realmente corresponde de acuerdo a los hechos y la ley vigente, y del concepto de administración con una sola, lo que en el caso significa la obligación de ésta de haber remitido los antecedentes a la aduana como parte del Servicio Nacional de Aduanas. No procede la avocación cuando existe un procedimiento dado por ley que garantiza a los administrados la posibilidad de hacerse oír en diferentes instancias de la administración, interponiendo de acuerdo al momento procesal en que se encuentra las reclamaciones contra aquellos actos que estima le son perjudiciales, lo contrario atenta al derecho de una defensa plena, violentando el debido proceso. En el caso particular, la Ley General de Aduanas, dispone a partir del Título VIII, el procedimiento ordinario que debe observarse en todos procesos que inicie la autoridad aduanera para dictar decisiones o actos con efectos externos para los administrados y el artículo 196, dispone como actuación común del procedimiento ordinario notificar a la parte y darle plazo para que presente alegatos. En el capítulo segundo, sección primera del título citado, artículo 198, se establece los recursos que caben contra el acto final dictado por la aduana, incluye el resultado de la determinación tributaria. Finalmente, hay que señalar que el artículo 93 de la Ley General de Administración Pública, de aplicación supletoria conforme al 192 de la Ley General de Aduanas, establece la facultad del superior de avocarse por razones de oportunidad, la decisión de asuntos del inmediato inferior cuando “no haya recurso jerárquico contra la decisión de éste”, y como ya fue expuesto líneas atrás, el cuerpo jurídico citado establece ese recurso.

Por lo expuesto y con base a los artículos 158, 169 y siguientes concordantes de la Ley General de Administración Pública, lo procedente es anular todo lo actuado en el expediente administrativo al existir falta de competencia de la Dirección General de Aduanas al conocer y resolver el escrito interpuesto, violentando de esa forma el debido proceso.

### **POR TANTO**

Esté Tribunal de conformidad con el artículo 91 del Código Uniforme Centroamericano, 204, 205 y 208 de la Ley General de Aduanas resuelve: anular todo lo actuado en expediente. Se devuelve el expediente administrativo a la oficina de origen para lo correspondiente. Notifíquese a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales y a Álvaro Lopez. Jimenez., Apoderado Generalísimo de Casacas. Rojas. de la Sabana. S.A., al teléfono – fax 237 – 47 – 84, por así requerirlo el interesado.

Licda. LORETTA RODRIGUEZ MUÑOZ  
Presidenta

LIC. DESIDERIO SOTO SEQUEIRA

LICDA. SHIRLEY CONTRERAS BRICEÑO

LIC. DICK REYES VARGAS

LICDA ALEJANDRA CESPEDES ZAMORA

LIC. LUIS GOMEZ SANCHEZ

LICDA. ELIZABETH BARRANTES COTOÇ

**Voto Salvado del Licenciado Reyes Vargas:** En el presente caso, el voto de mayoría se fundamenta, en una supuesta nulidad por falta de competencia de la Dirección General de Aduanas para conocer y resolver del recurso presentado, como claramente se indica en el último párrafo de las consideraciones. Al respecto en el punto 1 de las consideraciones, se interpreta erróneamente los alcances de la normativa contenida en el artículo 19 de la Legislación Centroamericana Sobre el Valor Aduanero de las Mercancías Ley número 7005 de setiembre 26 de 1985 en adelante Ley de Valor. Tal interpretación resulta errónea en tanto tiene como requisito esencial para investigar el valor, que tal investigación se realice a posterior del pago de los derechos arancelarios. Es mi criterio que tal normativa resulta clara en cuanto a sus alcances, en tanto señala: “La investigación y comprobación del valor aduanero, procederá aún posteriormente al pago...” ( el resaltado no es del original). Sea, que tal norma tiene por regla general la investigación y comprobación del valor aduanero, dentro del proceso de determinación de la obligación tributaria ( véase sobre el particular en artículo 73 del Cauca II ), permitiendo que fuera de ese proceso y posterior al pago de la obligación, puede también investigarse y comprobarse el valor aduanero, lo que entiendo como la excepción.

En cuanto la normas que utiliza como fundamento la aduana, creo el voto de mayoría realiza una apreciación sin fundamento alguno, en tanto no consta en expediente, prueba al respecto como tampoco constan los recursos eventualmente establecidos ante la aduana, los cuales considero debieron hacerse llegar para tener completo el cuadro fáctico necesario para una mejor resolución.

Por otro lado, en lo que respecta al fundamento del fallo de mayoría, considero que las consideraciones contenidas en los puntos 2 y 3 resultan incorrectas por cuanto a mi criterio, no resulta aplicable la normativa y recursos de la Ley General de Aduanas, en tanto existe norma expresa, especial y de rango superior a saber la Ley de Valor, la cual en su artículo 25 establece la fase recursiva en la materia. Tal artículo, recobra vigencia por disposición y en virtud de acaecer los presupuestos contenidos en el transitorio segundo de dicho cuerpo legal con la entrada en vigencia del Cauca II. En virtud de ello, corresponde a la Dirección General de Aduanas conocer los recurso de revisión en materia de valor, competencia que le es propia. Es importante resaltar además, que actúa correctamente la Dirección General de Aduanas, al aclarar al recurrente en el considerando primero de la resolución número RDVA-01-98 que entiende los recursos establecido, como los señalados en el numeral 25 de la citada Ley de Valor, en clara referencia a lo improcedente de los recursos y normas citadas por éste en su escrito, que lo que reflejan, es una clara ignorancia de la normativa aplicable.

Por otro lado, este tribunal debe actuar sometido al ordenamiento y solo puede realizar aquellos actos que le están permitidos. Tal mención respecto al principio de legalidad, la hago por cuanto, como dije al principio, lo que se conoce en el presente asunto en un recurso de apelación, en el que si bien la parte hace ver lo que a su juicio son errores en la aplicación de la normativa, lo hace dentro de sus argumentaciones de fondo, dirigidas a obtener una respuesta favorable a sus pretensiones y nunca incidentando una nulidad, como lo entiende el voto de mayoría. Además, la Ley General de Administración Pública en sus artículos 180, 181 y 184, establece una clara limitación a la competencia de este Tribunal, cuando le prohíbe, decretar de oficio nulidades absolutas, y le limita a conocer de los asuntos dentro del límite de las pretensiones de las partes y cuestiones de hecho planteadas. Por lo anterior a criterio del suscrito el voto de mayoría, a mas de contrario a las normas de la Ley General de Administración Pública de cita anterior, viola los derechos del recurrente, el principio de economía procesal. Por todo lo anterior estimo, debió este Tribunal pronunciarse sobre el fondo, el cual no se entra a analizar en virtud de lo resuelto.

## **Dick Rafael Reyes Vargas**

**Voto salvado de la Licda. Shirley Eug. Contreras Briceño:** Disiento de la decisión contenida en esta sentencia N° 07-98, y por ello salvo mi voto, con base en las siguientes razones:

1-Tal y como lo señala el voto de mayoría, en el resultando 1, el interesado presenta ante la Dirección General de Aduanas un escrito al que le denomina recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra un ajuste de valor efectuado por la Aduana Central en la declaración aduanera de importación definitiva N°503264, aceptada el 12 de junio de 1997.

2-Dicho recurso es presentado cuando aún no había concluido el despacho de las mercancías y además contra un acto emitido directamente por la aduana, por lo que a tenor de lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley General de Aduanas, contra dicho acto lo que caven son los recursos de reconsideración y revisión jerárquica ante la Aduana que emite el acto, siendo competencia de la Gerencia de la aduana resolver el recurso de reconsideración y en caso de rechazo total o parcial, remitir el expediente a la Dirección General de Aduanas, a fin de que se conozca y resuelva el recurso de revisión jerárquica. Una vez que la Dirección de Aduanas resuelve dicho recurso de revisión jerárquica y si aún persiste la inconformidad del interesado, el artículo 203 de la Ley General de Aduanas, lo faculta para interponer un recurso de apelación, dentro del plazo de 5 días, contra el acto emitido por la Dirección de Aduanas. Ese es el procedimiento que obligatoriamente y en virtud del principio de legalidad debió observarse en la tramitación del caso en estudio.

3-No obstante, en el presente caso el recurrente equivoca la vía para recurrir y en lugar de impugnar ante la aduana que emite el acto, recurre ante la Dirección de Aduanas, e interpone contra el acto de la aduana Central el recurso de apelación, lo cual es totalmente improcedente porque dicho recurso según la normativa señalada cabe exclusivamente contra el acto de la Dirección General de Aduanas.

4- Por su parte, la Dirección General de Aduanas, en lugar de aclarar al recurrente el error cometido y en virtud del principio de informalismo remitir el asunto a la Aduana Central para que conociera la reconsideración y luego si fuese necesario, conocer el recurso de alzada interpuesto como una revisión jerárquica, equivocadamente entra a conocer del recurso de reconsideración, lo que era totalmente improcedente y una vez rechazado el mismo, admite y emplaza al recurrente ante el Tribunal Aduanero, siendo que no existía ningún acto de la Dirección General que estuviese siendo impugnado mediante la apelación. Así, la Dirección General de Aduanas, violando el procedimiento previsto admite un recurso de apelación contra un acto de la aduana ,lo cual es improcedente porque como he señalado , el mismo cabe sólo contra el acto de la Dirección General de Aduanas, conforme el 203 de la L:G.A, que dispone:

”Contra la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional. Este recurso deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. Una vez interpuesto, en tiempo y forma, la Dirección General de Aduanas lo admitirá y emplazará a las partes para que dentro del plazo de diez días hábiles, se apersonen ante el Tribunal Aduanero Nacional y remitirá el expediente completo.” ( lo resaltado no es del original).

5-Siendo así las cosas, en criterio de la suscrita, en este momento procesal el Tribunal Aduanero Nacional no tiene competencia para entrar a conocer del recurso de apelación interpuesto, porque el mismo se interpuso contra un acto que no es posible jurídicamente impugnar mediante la apelación y deben devolverse los antecedentes a Dirección General de Aduanas, para que enderece los procedimientos sin entrar a conocer del supuesto recurso de apelación.

6-Llama la atención de la suscrita, lo manifestado por el voto de mayoría en el considerando 3, donde indica: “...es inadmisibile la actuación de la Dirección General de avocarse el conocimiento de un recurso sobre el cual todavía no es competente, siendo su obligación y lo correcto haber remitido el escrito interpuesto a la Aduana Central para que esta conociera del mismo...”, porque en mi criterio el Tribunal incurre en el mismo error que le señala a la Dirección de Aduanas, al haberse avocado al conocimiento y resolución de un recurso de apelación en un momento procesal que no es el oportuno, y contra un acto que no es recurrible ante esta sede, por lo que el Tribunal es incompetente para resolverlo, debiendo devolver

a la Dirección para que enderece el procedimiento. Porque si incluso tal avocación no es jurídicamente posible para la Dirección General de Aduanas, que es superior jerárquico de la Aduana Central, mucho menos podría hacerlo este Tribunal que no guarda ninguna relación de jerarquía con el Servicio Nacional de Aduanas, sino que está legalmente concebido como un órgano de jerarquía impropia, cuyas decisiones agotan la vía administrativa.

7-Debe recordarse que no obstante que el Tribunal no sea parte de la Administración Activa, sin embargo sigue siendo un órgano de carácter administrativo, que ,está sujeto en sus decisiones a observar el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que en criterio de la suscrita, no puede válidamente el Tribunal Aduanero actuar en contraposición con lo señalado por el ordenamiento jurídico y entrar a conocer del presente asunto por no estarse en la especie impugnado ningún acto de la Dirección de Aduanas, que es la competencia legalmente asignada a este Tribunal.

### **POR TANTO**

Se devuelven los antecedentes a la Dirección General de Aduanas para que enderece el procedimiento, sin entrar a conocer del recurso de apelación interpuesto por no ser competente este Tribunal en este momento procesal.

Licda. Shirley Eugenia Contreras Briceño  
Tribunal Aduanero Nacional.